

Editorial

Robo de cables conductores

El robo de cables de electricidad y de telecomunicaciones es un delito que a nivel nacional afecta a varias ciudades y zonas rurales, pero especialmente a los clientes, que ven interrumpidas sus comunicaciones y el suministro de energía. En nuestra Región del Biobío, Cabrero, Yumbel, Nacimiento y Santa Juana son algunas de las comunas que tienen los indicadores más críticos en esta materia. Se trata de un delito que carece muchas veces de evidencia y que se comete sobre todo en sectores rurales alejados, sin presencia policial, sin cámaras, ni guardias de las empresas.

El alto precio del cobre ha llevado al surgimiento de bandas organizadas que roban los cables de las redes, para venderlos en el mercado negro, e incluso se estima que falsifican documentos para su exportación a países vecinos. Estas acciones vandálicas interrumpen los servicios, dejan incomunicados a hogares y empresas, y obligan a suspender la atención en servicios públicos de salud, educación, bancarios, semáforos o cajeros automáticos, lo que genera un enorme impacto directo en la calidad de vida de las personas y el funcionamiento de las actividades.

Hace unos días la Compañía General de Electricidad (CGE) informó que durante los primeros nueve meses del presente ha sufrido 451 robos de cable de cobre, con un total de 150 kilómetros de este material (45 toneladas). Las regiones más afectadas por estos delitos han sido Arica y Parinacota, y Tarapacá, con 138 episodios, Coquimbo (112), O'Higgins (63), Antofagasta (54); Maule (32), Biobío (19), Araucanía (13), Metropolitana (7), Valparaíso-provincia de Melipilla (7), y Atacama (6).

La compañía ha denunciado la asociación de los delincuentes a bandas del crimen organizado, destacando su especialización y capacidad técnica para llevar a cabo estos actos. Los robos han generado interrupciones en el suministro eléctrico para más de 165 mil clientes. CGE ha estimado en más de 2.190 millones de pesos los costos de

reparación de la infraestructura dañada, por lo que se ha llamado a las autoridades a combatir estas bandas delictivas y mejorar la calidad del servicio eléctrico en la zona de concesión de la empresa.

De acuerdo con cifras de las distribuidoras eléctricas Frontel y CGE, entre 2023 y 2024 ha aumentado en 54% la cantidad de conductores de cobre sustraídos. En el caso de Frontel, los robos han afectado especialmente a Cabrero, Santa Juana, Los Ángeles, Quillico y Yumbel. La Fiscalía Regional del Biobío ha advertido que este ilícito ha crecido alrededor de 50% en un año y que se ve un alto nivel de experiencia por parte del crimen organizado. Tanto las fiscalías como la PDI trabajan para determinar los lugares donde se venden los cables de cobre, las chatarrerías donde lo procesan y lo mezclan con otros productos lícitos, las áreas de acopio, e incluso cómo se exporta.

Este delito ha aumentado de manera explosiva a nivel nacional desde el año 2022 a la fecha. El hurto de este tipo de material se ha transformado en el nuevo negocio ilegal de las bandas de crimen organizado. En el caso de las redes de las compañías de telecomunicaciones, esto ocurre a largo de todo Chile y con mayor presencia en las zonas más vulnerables del país,

que es precisamente donde las empresas telefónicas enfrentan el desafío de reducir la brecha digital. Se estima que participan bandas organizadas, que disponen de vehículos, escalas y herramientas para retirar las redes eléctricas o de telecomunicaciones, con el fin de vender el cobre que contienen, en chatarrerías formales o informales. Pero cuando se daña la fibra óptica de telecomunicaciones, se requieren complejos procesos de reparación.

Las empresas señalan que es relevante generar conciencia y fomentar la denuncia por parte de la ciudadanía. La situación es preocupante porque es un delito que ha aumentado de manera importante, sobre todo en los sectores rurales, donde muchas veces no hay testigos, por tratarse de lugares aislados.

CGE informó que en los primeros nueve meses del presente ha sufrido 451 robos de cable de cobre, con un total de 150 kilómetros de este material. De ellos, 19 robos corresponden a la Región del Biobío.